



PODER JUDICIAL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NÚMERO: 1817/2019

ACTORA: *****

AUTORIDADES DEMANDADAS: 1)
COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES y 2)
DIRECTOR DE LA PENSIÓN MUNICIPAL DE
AGUASCALIENTES.

Aguascalientes, Aguascalientes, a treinta y uno de enero de dos mil veinte.

V I S T O S para resolver en definitiva los autos del juicio de nulidad número **1817/2019**, y;

R E S U L T A N D O:

I.- Mediante escrito presentado en Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado, el día quince de octubre de dos mil diecinueve, remitido a esta Sala al día hábil siguiente, *********
**** *******, demandó de las autoridades al rubro indicadas, la nulidad de los actos administrativos que precisó en los siguientes términos:

*“... La NULIDAD del crédito fiscal sin número, por la cantidad de \$25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) derivado de la inspección con folio ********* que se me realizara el día **07 de octubre de 2019**, resolución que niego lisa y llanamente que exista, puesto que a la fecha no se me ha notificado de manera legal el supuesto crédito.*

*Así como la ilegal detención de mi vehículo por la Coordinación General de movilidad, con fecha **siete de octubre de dos mil diecinueve**.*

...”

II.- El dieciocho de octubre de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda, se recibieron las pruebas ofrecidas y se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas.

III.- Mediante proveído de quince de noviembre de dos mil diecinueve, se recibió la contestación de la demandada formulada por la COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD DEL

ESTADO, pronunciándose esta Sala en relación a las pruebas ofrecidas; de igual manera, en dicho auto se declaró por perdido el derecho al DIRECTOR DE LA PENSIÓN MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

IV. Por acuerdo del diez de enero de dos mil veinte, se declaró por perdido el derecho de la parte actora para formular ampliación de demanda y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia de juicio.

VI.- En la audiencia de juicio que fue celebrada el veintisiete de enero del dos mil veinte se desahogaron las pruebas admitidas a las partes, posteriormente se pasó al periodo de alegatos, y se citó el asunto para sentencia definitiva, que hoy se dicta; y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Esta Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, es competente para conocer del presente juicio, conforme a los artículos 51, párrafo segundo, y 52, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 33-A y 33-F, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado y artículos 1º y 2º, fracción I, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, en virtud de que se impugnan actos administrativos así como una negativa ficta atribuidos todos ellos a una autoridad del Estado de Aguascalientes; que el particular afirma le causan agravio.

SEGUNDO. Precisión y existencia de los actos impugnados:

a) Por lo que hace a la demanda inicial

Con fundamento en el artículo 60, fracción I, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes¹, y a fin de fijar con exactitud la cuestión a resolver, se precisa que los actos impugnados en el presente juicio lo son:

1.- El crédito fiscal que dice la demandante, deriva del

¹ “ARTICULO 60.- Las sentencias que dicte la Sala no necesitarán formulismo alguno, pero deberán contener:

1.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las pruebas que se hayan rendido;...”



Acta de Inspección con número de folio ***** del siete de octubre de dos mil diecinueve, levantada por inspector adscrito a la Coordinación General de Movilidad del Estado de Aguascalientes.

2.- El aseguramiento de vehículo destinado a servicio de Transporte Público, impuesto como medida de seguridad según Acta de Inspección con número de folio ***** levantada el siete de octubre de dos mil diecinueve, por inspector adscrito a la Coordinación General de Movilidad del Estado de Aguascalientes.

La existencia del aseguramiento de vehículo se acredita con el “acta circunstanciada de Inspección” que se acompañó a la demanda, de la que igualmente obra copia certificada a fojas 45 a la 48 de los autos, por haberla exhibido la autoridad demandada; siendo una DOCUMENTAL pública, con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia contenciosa administrativa, conforme lo disponen los artículos 3 y 47 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes; al tratarse de un acta emitida por servidor público en ejercicio de sus funciones.

TERCERO. Causal de improcedencia respecto al crédito fiscal que dice la demandante, deriva del Acta de Inspección con número de folio *****.

Previo al estudio de los conceptos de nulidad, por ser una cuestión de orden público, que impediría el estudio de aquellos, se procede oficiosamente, por lo que al mencionado acto se refiere, al estudio de la causal de improcedencia prevista en el artículo 26, fracción VI de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, que textualmente establece lo siguiente:

“ARTICULO 26.- Es improcedente el juicio ante la Sala,
contra los actos:

...

VI.- De cuyas constancias de autos apareciera, de manera clara, que no existe la resolución o el acto impugnado;

...”

En el caso, la parte actora demanda entre otros actos, la nulidad del Crédito Fiscal derivado del acta de inspección con número de folio *****, sin embargo, del contenido de la misma no se advierte la existencia de crédito fiscal alguno.

En efecto, del “Acta Circunstanciada de Inspección” con número de folio *****, misma que obra en autos por haberse acompañado a la demanda, se obtiene que en ella, se hizo constar la imposición de la medida de seguridad consistente en el retiro de la circulación de vehículo destinado al Servicio de Transporte Público, y al final de la misma, la citación al infractor para que acudiere a las oficinas de la demandada “donde previos trámites de ordenanza, será dictada la resolución que proceda de acuerdo con los hechos constatados en la presente diligencia”, sin que de tal acta se desprenda la existencia de crédito fiscal alguno.

Luego, si del acta de inspección no se advierte la determinación de crédito fiscal alguno en contra de la parte actora, ni tampoco se desprende su existencia de las demás actuaciones que integran el expediente, se actualiza la causal de improcedencia relativa a la inexistencia del acto impugnado.

Robustece lo anterior la tesis de jurisprudencia, Tesis: VI.3o.A. J/24, de la novena época, Tomo XVI, Diciembre de 2002, página: 628, registro: 185384, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, que al rubro y texto dice:

“INEXISTENCIA DE LA RESOLUCIÓN O ACTO IMPUGNADO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. DIFERENCIA ENTRE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA Y SOBRESER EN EL JUICIO DE NULIDAD. Cuando el actor demanda la nulidad de un acto administrativo o fiscal y asegura que lo desconoce y, por ende, no puede exhibir con la demanda la prueba de lo impugnado, se actualiza el supuesto del artículo 209 bis, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, por lo que el tribunal debe admitir a trámite la demanda y emplazar a la autoridad demandada para que la conteste; si ésta niega la existencia de tal acto o resolución y el actor no logra desvirtuar esa negativa, el juicio carecerá de materia y procederá el



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL EDO.
SENTENCIA DEFINITIVA
EXPEDIENTE 1817/2019

sobreseimiento con base en los artículos 202, fracción XI y 203, fracción II, del citado código tributario. Cabe destacar que no debe confundirse este caso con el diverso de desechar de plano la demanda por inexistencia del acto impugnado, ya que en éste debe brindarse la oportunidad de defensa al actor para que, en ejercicio de su garantía de audiencia, aporte pruebas tendentes a demostrar la existencia del acto impugnado.

Por lo dicho, procede decretar el SOBRESEIMIENTO del presente juicio, por lo que hace al Crédito Fiscal derivado del acta de inspección con número de folio *********, atentos a lo dispuesto por el artículo 27 fracción II de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes que establece:

“ARTICULO 27.- Procede el sobreseimiento del juicio.

...II.- Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguno de las causas de improcedencia a que se refiere el Artículo anterior;...

...El sobreseimiento se podrá decretar en cualquiera de los casos antes señalados de oficio o a petición de parte.”

CUARTO. Al no hacerse valer causal de improcedencia alguna, lo que procede es estudiar los conceptos de nulidad que hace valer el accionante, los que por economía procesal no se transcriben, aunado a que no es un requisito formal de las sentencias².

Del mismo modo, se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias, las defensas opuestas por las demandadas, sin que puedan ser tomados en cuenta los motivos y fundamentos legales para la emisión del acto impugnado que no hayan sido invocados en éste, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado.

QUINTO. Estudio de los conceptos de nulidad expresados en contra del Aseguramiento de Vehículo decretado como medida de seguridad en el acta de inspección.

Los conceptos de nulidad expresados por la parte

² Al respecto, véase la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la novena época, localizable con número de registro: 164618, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro señala: **“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”**

actora, serán abordados cambiando el orden en que fueron propuestos, agrupándolos o desagregándolos, de acuerdo a su afinidad temática.

En el PRIMER concepto de nulidad del escrito inicial de demanda, expresa la parte actora que la resolución impugnada es ilegal, al violar lo dispuesto por el artículo 4º, fracción V, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, en razón de que carece de los requisitos de fundamentación y motivación, al desconocer los motivos y fundamentos que la originaron.

Agrega en el SEGUNDO concepto de nulidad del escrito inicial de demanda que el Acto Impugnado, incumple los requisitos de motivación a que se refiere el artículo 119 del Reglamento de Tránsito para el Estado de Aguascalientes.

Los conceptos de nulidad de análisis, son por una parte INOPERANTES y por otra INFUNDADOS, como a continuación se analiza.

Resultan en primer término INOPERANTES, al ser genéricos y superficiales.

Es así, porque la parte actora hace valer conceptos de nulidad para combatir la supuesta falta motivación del acta de inspección, al supuestamente incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 119 del Reglamento de Tránsito Para el Estado de Aguascalientes.

Siendo que del Acta de Inspección Impugnada, se advierte:

) Que la autoridad actuante lo fue un inspector adscrito a la Dirección General de Transporte Público de la Coordinación General de Movilidad;

) Que el motivo de la actuación fue el realizar tareas de inspección en materia de transporte público;

) Que la autoridad fundamenta su actuación en términos de lo establecido por los artículos 275, 276 fracciones I, II, III y VI; 278, fracciones I y III, 279 y 280, fracción III de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes



Por lo que el argumento de la parte actora deviene **inoperante** al referirse en su razonamiento al Reglamento de Tránsito para el Estado de Aguascalientes y en particular, al incumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 119 del referido reglamento, siendo que, las actuaciones fueron realizadas por una **autoridad estatal en materia de transporte público**, para verificar el **cumplimiento de obligaciones legales en esta materia** y que el fundamento de actuación lo fue la **Ley de Movilidad del Estado** y no el referido Reglamento de Tránsito Municipal, de ahí que los argumentos expuestos, resulten **inoperantes** al no expresar las razones conforme a las cuales debiere aplicarse como fundamento legal el Reglamento de Tránsito y no el ordenamiento citado por la autoridad en su actuación.

Al respecto, es aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/48, de la novena época, con número de registro: 173593, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indica:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez.”

En relación al argumento de que el acta impugnada

carece de los requisitos de fundamentación y motivación, al desconocer los motivos y fundamentos que la originaron.

Tales argumentos, resultan INFUNDADOS.

Es así, porque contrario a lo manifestado por la parte actora, el Acta de inspección impugnada si cumple con los requisitos de fundamentación y motivación en relación a las circunstancias, motivos y fundamentos.

Es así, porque en el Acta de Inspección impugnada (foja **45 a 48** de los autos), se advierte lo siguiente:

*“En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 13:20 horas del día 07 del mes de OCTUBRE de dos mil diecinueve, el c. ***** ***** ***** *****”, en mi carácter de inspector de la Dirección General de Transporte Público de la Coordinación General de Movilidad...*

*al encontrarme en ***** ***** ***** ***** ***** ***** realizando las tareas de inspección en cumplimiento con los artículos 275 y 276 fracción I, II, III y VII de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes; ...*

...

*me percaté que sobre el arroyo de la calle antes mencionada, circulaba el vehículo con placas *****, número económico y/o de identificación ***, marca INTERNACIONAL, color C/ PUBLICIDAD, con 20 ocupantes, quien se encuentra prestando el servicio de transporte público, procediendo a realizar la inspección sobre dicha unidad para determinar la forma en que se presta el servicio, solicitando al operador la documentación necesaria para prestar el servicio de transporte público colectivo urbano, en términos de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes y ordenamientos aplicables, en tal virtud se deja asentados los siguientes hechos: que se entiende la diligencia con quien manifiesta ser ***** ***** ***** ***** ***** ******

... Manifestado asimismo por el operador respecto a los documentos solicitados motivo de la inspección que: NO CUENTA CON EL PERMISO CORRESPONDIENTE PARA REALIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EXPEDIDO POR CMOV, Por lo que, luego de la inspección realizada y al no acreditar que cuenta con la correspondiente concesión o permiso temporal vigente para prestar el servicio de transporte público en su modalidad de transporte público colectivo urbano, se actualiza la infracción al artículo 311 de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes...

... en relación con los artículos 278, fracción I y III, 279 y 280, fracción III, del mismo ordenamiento, se procede a decretar la siguiente medida de seguridad indicándole al interesado las razones y fundamento que la justifican, ello de conformidad con los artículos 70 y 75 de la Ley del Procedimiento Administrativo de Aguascalientes, la cual se hace consistir en la suspensión total del servicio, por consiguiente, se



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

determina y aplica el retiro de la circulación de dicha unidad al no tener concesión o permiso para prestar el servicio de transporte en las vías de comunicación estatal o municipales...

...

Con lo cual se da por terminada la inspección, siendo las 13:00 horas con 33 minutos del día 07 del mes de OCTUBRE de dos mil diecinueve, firmando los que intervenimos en la presente y quisieron hacerlo, dejando una copia de esta actuación en poder de la persona con la que se entendió la diligencia”

De lo transcrito se obtiene lo siguiente:

) El acta impugnada si narra circunstancias de tiempo, modo y lugar;

) El acta impugnada, si expresa las razones particulares que llevaron a determinar la medida de seguridad de retiro de la unidad; en la especie: no contar con permiso para realizar actividades de transporte público;

) Del acta impugnada, se desprende que en ella se asentó que el vehículo estaba circulando, detallando incluso el número de personas (20) que se encontraban en la unidad y el lugar exacto en que fue detenida (*****

*****)

) En el acta, se expresan los fundamentos en relación a la inspección realizada, entre otros los artículos 275, 276 fracciones I, II, III y VI; 278, fracciones I y III, 279 y 280, fracción III de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes

Por lo que es incorrecto que en el Acta de Inspección no se hayan asentado las razones y fundamentos de la actuación de la autoridad, de ahí lo infundado del concepto de nulidad de estudio.

Agrega la parte actora en el TERCER concepto de nulidad del escrito inicial de demanda, así como en el CUARTO y en el SEXTO, que el acto impugnado es ilegal al incumplir con las formalidades que legalmente debe revestir el acto.

Lo anterior, porque Niega Lisa y Llanamente que exista

una orden de verificación de autoridad competente, con lo cual, afirma, se violó lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes.

Los conceptos de nulidad de estudio son **INFUNDADOS**.

Es así, porque la ley especial de la materia que rige la inspección de transporte público es la Ley de Movilidad del Estado, siendo que la Ley del Procedimiento Administrativo sólo es aplicable de manera **supletoria**.

En lo específico **no resulta aplicable** el artículo 61 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, invocado por la parte actora, ya que el artículo 279 de la Ley de Movilidad del Estado, establece el marco especial de actuación para los inspectores actuantes.

Para mayor comprensión de lo aquí analizado, conviene transcribir los artículos 1º, primer párrafo, 8 y 279, párrafo primero y segundo de la Ley de Movilidad del Estado y 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes:

“Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes

ARTÍCULO 1º.- *Esta Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto tutelar el derecho a la movilidad, estableciendo las bases, normas y principios para la planeación, programación, proyección, regulación, coordinación, implementación, gestión y control de la movilidad de personas y transporte de bienes en el Estado y sus municipios, mediante la creación de sistemas de **movilidad integral y de transporte**.*

...

ARTÍCULO 8º.- *En todo lo no previsto por la presente Ley se aplicarán de manera supletoria la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Aguascalientes, el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes, la **Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes**, el Código de Procedimientos Civiles del Estado Aguascalientes, la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes y la Ley de Expropiación para el Estado de Aguascalientes, según corresponda.*

...

ARTÍCULO 279.- *Tratándose de los servicios de transporte público, cuando los inspectores de la CMOV adviertan una irregularidad en la prestación del servicio que*



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL EDO.
SENTENCIA DEFINITIVA
EXPEDIENTE 1817/2019

pueda implicar un riesgo grave para la seguridad o el orden público, podrán detener, asegurar y en su caso confinar, por sí mismos o con el auxilio de la fuerza pública, los vehículos que prestan dichos servicios y, en su caso, retirar placas o documentos del vehículo que corresponda.

En estos casos, la autoridad deberá levantar un acta circunstanciada en donde se determinen las circunstancias de hecho y los fundamentos de derecho que determinen la procedencia de providencia cautelar, la cual sólo podrá dictarse por el tiempo necesario para corroborar la gravedad del riesgo en la prestación del servicio y para señalar las medidas concretas que debe tomar el concesionario o permisionario para corregir las irregularidades encontradas.

...
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes

ARTICULO 61.- Los verificadores, para practicar visitas, deberán estar provistos de orden escrita con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la que deberá precisarse el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba tener y estar debidamente fundada y motivada.

...”

De lo transcrito se obtiene lo siguiente:

) La Ley especial en materia de transporte público de personas es la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes;

) La Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, solamente es aplicable de manera supletoria a la materia de transporte público;

) La Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, establece las reglas generales para realizar vistas de verificación, estableciendo en su artículo 61, la condicionante de que las visitas de verificación sean precedidas de una orden de verificación.

) El artículo 279 de la Ley de Movilidad del Estado (ley especial aplicable), establece un régimen de excepción en el cual no es necesario que los inspectores cuenten con orden previa de inspección, ello, cuando se advierta una irregularidad en la prestación del servicio que pueda implicar un riesgo grave para la seguridad o el orden público, lo que faculta a los inspectores a detener, asegurar y en su caso confinar, por sí mismos los vehículos

que prestan dichos servicios, debiendo la autoridad en estos casos, levantar un acta circunstanciada en donde se determinen las circunstancias de hecho y los fundamentos de derecho que determinen la procedencia de providencia cautelar.

Así, en el caso de estudio y conforme al acta de inspección que previamente fuera transcrita, se advierte que se colmaron todos los elementos para la aplicación de la situación de excepción establecida en el artículo 279 de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, en virtud de que el inspector advirtió la circulación de un vehículo prestando el servicio de transporte público, con 20 personas a bordo y sin que se contara con permiso ni autorización para la prestación de dicho servicio, por lo que el inspector procedió a levantar el acta de inspección que se impugna, circunstanciando los hechos e invocando los fundamentos antes referidos y determinando una medida cautela consistente en la suspensión del servicio y el retiro de circulación de la unidad, siendo que los hechos que motivaron la inspección eran irregulares e implicaban un riesgo grave para la seguridad y orden público, ello, en virtud de que un vehículo ofreciendo transporte colectivo urbano a pasajeros sin contar con la concesión o permiso correspondiente, es una situación que sin duda resulta grave y que amerita la acción inmediata del inspector, con el fin de impedir que la conducta irregular se siga cometiendo.

Luego, no resulta aplicable el artículo 61 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, invocado por la parte actora, siendo infundados los conceptos de nulidad en estudio.

Continuando con el examen de los conceptos de nulidad, aduce la parte actora en el QUINTO de los del escrito inicial de demanda, que el acto impugnado carece de los requisitos de fundamentación y motivación en relación a la multa impuesta.

Agrega en el QUINTO concepto de nulidad que igualmente carece de los requisitos de fundamentación y motivación,



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUISCALIEN TES

ya que nunca le fue entregada boleta de infracción alguna y que el supuesto oficial es omiso en cuanto especificar el hecho concreto real y específico por el que se sanciona y que en el acta de infracción no se distingue nada de lo actuado por el oficial de tránsito.

Los conceptos de nulidad de estudio son INOPERANTES, al estar basados en premisas falsas.

Es así, porque de ninguna de las constancias que obra en el expediente, se advierte la existencia ni de una multa, ni de un boleta de infracción ni mucho menos la intervención de un “oficial” (de tránsito), por lo que los argumentos parten de una premisa falsa, por lo que a nada práctico llevaría el análisis de los mismos, de ahí su inoperancia.

Al respecto, resulta aplicable por analogía la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 108/2012, de la décima época, con número de registro: 2001825, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro y texto dice:

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida.”

También, es aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia XVII.Io.C.T. J/5, de la décima época, con número de registro: 2008226, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que al rubro y texto indica:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende,

merecen el calificativo de inoperantes.”

Continúa manifestando la parte actora en el SEXTO de los conceptos de nulidad que el Acta impugnada es ilegal al carecer de firma autógrafa, apreciándose a simple vista que la misma se encuentra con firma facsimilar o fotocopia.

El concepto de nulidad de estudio es INFUNDADO.

Es así, porque del Acta de Inspección que la parte actora acompañó a su demanda, se advierte que se asentó; no sólo la presencia del inspector actuante, la persona con quien se entendió la inspección —***** **

***** **

*****— y la de los testigos de asistencia; sino la hora y fecha en que se dio por terminada “firmando los que intervenimos en la presente y quisieron hacerlo” además de entregar una copia del acta al inspeccionado, sin que se haga por tanto necesaria la existencia de firma autógrafa por tratarse de sólo una copia, además de que no existe disposición alguna que eleve a formalidad del procedimiento de inspección, la entrega al inspeccionado o verificado, de acta circunstanciada con firmas autógrafas de quienes hubieren intervenido en la diligencia.

Luego, si en la propia acta se asentó que fue firmada por quienes intervinieron en la diligencia de inspección, ante la existencia de firma del inspeccionado y testigos de asistencia, la afirmación de la demandada en el sentido de que el acta si contiene firma autógrafa y ante la constancia de entrega y notificación de copia del Acta de Inspección; la carga para comprobar la supuesta falta de firma autógrafa recaía sobre la parte actora en términos de lo dispuesto en el artículo 235 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes³, de aplicación supletoria a la materia contenciosa administrativa, conforme a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, sin que al efecto la parte actora haya ofrecido prueba

³ “ARTICULO 235.- El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus excepciones”.



alguna, de ahí lo infundado del argumento de estudio.

Al ser **INFUNDADOS** e **INOPERANTES** los conceptos de nulidad expresados por la parte actora, lo que procede es **RECONOCER LA VALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO** consistente en el Aseguramiento de vehículo derivado del Acta de inspección con número de folio ********* instruida el **siete de octubre de dos mil diecinueve**, por inspector adscrito a la Coordinación General de Movilidad del Estado de Aguascalientes y mediante la cual, se dictan medidas de aseguramiento de un vehículo propiedad de la parte actora, al considerar que se encontraba realizando servicio de transporte público sin contar con concesión.

Por las razones que informan el presente fallo y con fundamento en los artículos 26, fracción VI, 27, fracción II, 59, 60 y 62, fracción I de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, se resuelve:

PRIMERO.- En términos de lo analizado en el **TERCER** considerando de esta sentencia, se decreta el **SOBRESEIMIENTO** en relación al supuesto Crédito Fiscal derivado de la inspección con número de folio ********* impugnada.

SEGUNDO.- La parte actora **no** acreditó su acción de nulidad en relación al aseguramiento de vehículo destinado a servicio de Transporte Público, impuesto como medida de seguridad según Acta de Inspección con número de folio ********* levantada el **siete de octubre de dos mil diecinueve**, por inspector adscrito a la Coordinación General de Movilidad del Estado de Aguascalientes.

TERCERO.- Se **RECONOCE LA VALIDEZ** del Acta de inspección con número de folio ********* instruida el **siete de octubre de dos mil diecinueve** por inspector adscrito a la Coordinación General de Movilidad del Estado de Aguascalientes y mediante la cual, se dictan medidas de aseguramiento de un vehículo propiedad de la parte actora, al considerar que se encontraba realizando servicio de transporte público sin contar con concesión o permiso temporal vigente.

CUARTO.-NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

Así lo resolvió esta Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, por unanimidad de votos de los magistrados Enrique Franco Muñoz, Rigoberto Alonso Delgado, y Alfonso Román Quiroz, siendo ponente el primero de los nombrados, quienes conjuntamente firman ante la Licenciada María Hilda Salazar Magallanes, Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

La resolución anterior se publicó en la lista de acuerdos del cuatro de febrero de dos mil veinte. Conste.-

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS



La C. Secretaria General de Acuerdos de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes:

CERTIFICA:

Que la presente impresión contenida en dieciséis páginas útiles de la sentencia definitiva dictada dentro del expediente número 1817/2019, concuerda fielmente con la sentencia original que obra en dicho expediente y que se encuentra firmada por los Magistrados que integran éste órgano jurisdiccional así como por la suscrita, las que se certifican a fin de notificar a las partes, a los *treinta y un días del mes de enero de dos mil veinte*. Doy fe.-

LIC. MARÍA HILDA SALAZAR MAGALLANES
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SALA
ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL